

AGENDA CIUDADANA.

¿Y QUIEN VA A ACABAR CON LA SIMBIOSIS PRI-GOBIERNO?

Lorenzo Meyer

Uno de los temas que está en el centro de la discusión política -al menos formalmente-, es la necesidad de separar efectivamente al gobierno del partido que ha mantenido un control ininterrumpido de la vida política mexicana por trece lustros. Sin esa separación seguirá siendo imposible una competencia electoral legítima. Pero ¿qué posibilidades reales hay de poner fin a la simbiosis PRI-gobierno, y que equivaldría a redefinir todo el sistema político mexicano? No muchas. Los que exigen acabar con esa vieja unión, ilegal e ilegítima, entre el gobierno de todos y el partido del presidente, simplemente no están en posibilidad de hacer efectiva su demanda; y los que si podrían hacerla, no tienen voluntad ni motivo real para llevarla a cabo.

Veamos primero el tema de la voluntad. Partiendo del resultado de las últimas elecciones federales, se tiene que el tema de la separación PRI-gobierno es importante sólo para la mitad del electorado: justamente la mitad que votó por la oposición y perdió. Esta mitad perdió no sólo la presidencia sino también el Congreso, donde su representación será mucho menos de la mitad (40% en la cámara de diputados y 25% en la de senadores). Entre las varias razones que explican esa derrota, destaca el hecho de que para una parte de la oposición era -y sigue siendo- mucho más importante acabar con el otro opositor que con el régimen de partido de Estado.

Así pues, una mitad del electorado -la que busca crear las condiciones para la democracia diferenciando al PRI del gobierno- va a estar representada en el gobierno por la vía legislativa, pero sin capacidad de acción efectiva. La otra mitad del electorado, la que ganó, es la que justamente va a servir de base política y social a los viejos e importantes intereses que tienen como objetivo la continuación del un sistema de partido de Estado. Ahí no hay ninguna voluntad política de hacer realidad una separación que nunca ha existido, que la mayoría de esos votante no consideraron importante o deseable y que, en cualquier caso, acabaría con el PRI que ellos conocen y aceptan como un mecanismo que gestiona sus demandas ante el poder gubernamental a cambio de un apoyo en las urnas.

Si la mitad de los mexicanos con la voluntad y la capacidad de hacer del voto un instrumento para poner fin a la simbiosis del partido oficial-gobierno, no pudo lograr su objetivo, y si para la otra mitad el tema simplemente no entró en su agenda, entonces se puede concluir que al nivel de la sociedad civil, aún no existen las condiciones para llevar a cabo ese cambio portentoso que sería un parteaguas en la historia política mexicana del siglo XX.

Ahora bien, resulta que una buena parte de los cambios en el pasado mexicano han sido obra de, o al menos iniciados por, las élites. ¿Que posibilidades hay de que el cambio en la relación PRI-gobierno venga por una exigencia o decisión de esas personas o grupos que conforman la verdadera estructura de poder en México. Desafortunadamente, "los que mandan" -para usar el

concepto del argentino José Luis de Imaz-, tienen una visión del mundo económico, político, social o cultural, que poco o nada tiene que ver con la que se supone que es la propia de un sistema liberal y democrático. En realidad, no por su discurso pero si por su forma de actuar, tenemos derecho a suponer que el proyecto de "los que mandan" es prolongar lo más que se pueda el arreglo que tan buenos frutos ha dado para ellos: el del México autoritario, el del México donde un partido que es imposible de diferenciar del gobierno, es también la garantía del mantenimiento de la estabilidad y de la continuidad de la red de compromisos en la que se sostienen los grandes intereses creados.

Pero, en concreto, ¿quienes son "los que mandan" aquí?. En primer lugar, y encabezando al conjunto, la alta burocracia gubernamental; esa que llegó a la presidencia o al gabinete no por la vía del PRI sino siguiendo las reglas y códigos de la propia hermandad burocrática, -lo que muestra bien a las claras que el PRI mismo no es fuente de poder sino un mero instrumento. No en balde en México fue primero el Estado y después todo lo demás, el mercado, la burguesía, los obreros, los partidos, etcétera. En esas condiciones, ¿puede querer esa tecnocracia que hoy gobierna que se separe el PRI del aparato de Estado que ella controla, para que luego los políticos que hacen carrera por la vía del partido -los políticos-políticos, los sin doctorado, los de infantería- les disputen el derecho a gobernar y los subordinen?. Creo que no.

Luego está ese grupo que controla las corporaciones en que se montó el sistema de poder postrevolucionario: los líderes

sindicales, los agrarios, y los de todas las agrupaciones que forman la compleja red corporativa que, finalmente, el neoliberalismo imperante recicló pero no eliminó. En otras condiciones, estos cuadros políticos podrían ver en la independencia del PRI el primer paso para desplazar del poder a los jóvenes y prepotentes tecnócratas que tan duramente los han tratado. Pero ahí está el ejemplo de Joaquín Hernández Galicia para recordarles el peligro de la insubordinación. Fidel Velázquez y los centenares de pequeños fideles velázquez que componen los cuadros de ese aparato corporativo, hace mucho que se acostumbraron a depender del gobierno y a vivir a su sombra. Un cambio en las reglas del juego político en favor de la independencia al partido de Estado, traería para todos los Velázquez del mundo mexicano el terrible riesgo de ser desplazados por un liderazgo nuevo, uno que respondiera más a las bases de sus corporaciones que a la jefatura gubernamental.

Obviamente, en el centro de la elite formada por "los que mandan", están aquellos personajes que fueron invitados en febrero de 1993 a la cena de los 25 con el presidente Salinas y a los que se pidió que aportaran al PRI otros tantos millones de dólares cada uno. Son lo que controlan las grandes acumulaciones de capital, y no hay ninguna de las empresas que ellos comandan que no haya sido, al menos en parte, resultado de una "relación especial" con el gobierno del régimen de partido de Estado. Es esa relación, por ejemplo, la que le ha mantenido el monopolio a Televisa, la que ha contratado las grandes obras públicas con la ICA, la que diseñó FICORCA en el decenio pasado para salvar a un

buen número de las grandes empresas de Monterrey de la crisis provocada por su endeudamiento externo. Fue la relación con la alta burocracia gubernamental la que decidió quien se habría de beneficiar con el monopolio telefónico, quienes habrían de ser los neobanqueros, -muchos de ellos personajes casi desconocidos y sin grandes capitales apenas unos años atrás. Sin una estrecha y funcional relación con el gobierno, sería impensable el grupo empresarial encabezado por Hank González. Si se desciende de nivel, se descubre sin mayor trabajo el mismo tipo de relación descrito entre el gran comerciante de la pequeña ciudad o el cacique y los niveles gubernamentales y priístas de su nivel. En realidad, toda la estructura económica actual, el *Who is Who* de los negocios mexicanos, se explica, al menos en parte, por las conexiones personales de las élites económicas con el liderazgo de un gobierno que esta montado en un aparato de partido de Estado. ¿Qué interés pueden tener, pues, estas personas en acabar con tan buen arreglo? Creo que muy poco. Y el vehemente apoyo público del neobanquero Roberto Hernández al candidato del partido de Estado antes de las elecciones de agosto, o la proliferación de la células empresariales del PRI, son botones de muestra de la funcionalidad de la relación entre los hombres del dinero mexicano con los del poder político en el marco de un régimen de partido de Estado.

Hoy, más que antes, entre "los que mandan" hay que volver a contar a los obispos. Y si bien es verdad que don Samuel Ruiz es un problema para la estructura del poder, es igualmente cierto que el representante del Vaticano, el señor Gerónimo Prigione y

un buen número de mandatarios de la Iglesia Católica, no han mostrado mayor interés en que se modifique la naturaleza del poder en nuestro país. Los que controlan los medios masivos de difusión, empezando por la televisión pero incluyendo a los radiodifusores y a un buen número de periódicos, se han comportado como buenos y seguros sostenedores del *status quo* político, y no hay razón para suponer que estos concesionarios, siempre prudentes y temerosos de la ley no escrita en esta materia, van a variar su línea de apoyo o, al menos, aceptación a la continuación de la simbiosis gobierno-partido. Con el conflicto de Chiapas, el ejército ha vuelto a ganar espacio en los procesos de toma de decisiones -un indicador es el notable aumento de la participación de las fuerzas armadas dentro del presupuesto-, y nada autoriza a pensar que los altos mandos prefieran un arreglo político distinto del existente.

Finalmente está el mundo externo. Las elecciones del 21 de agosto permitieron a los gobiernos y capitales de las grandes potencias con las que México se relaciona -notablemente Estados Unidos- dar su sello de aprobación a la legitimidad del sistema imperante. Gracias a la presencia de observadores extranjeros, esos gobiernos pudieron sin el sonrojo de 1988, felicitar al candidato del PRI por su victoria. A ninguno de esos gobiernos -cuya buena voluntad es esencial para la preservación del actual arreglo político mexicano-, le importó que la contienda electoral de 1994 se hubiera dado entre un partido de Estado y dos partidos de oposición con recursos económicos y políticos infinitamente inferiores a los del PRI. Para el mundo exterior -ansioso de

preservar la estabilidad autoritaria mexicana y de profundizar la apertura económica del país- lo único que pareció importar es que el día de la elección no se diera el fraude masivo y evidente de hace seis años; la brutal desigualdad de los contendientes en todo el proceso que culminó el 21 de agosto, le tuvo sin cuidado. En realidad, para el mundo externo y en relación a México, difícilmente puede haber mejor noticia que el no cambio.

El conclusión, la lucha de sólo una parte de la sociedad civil mexicana por separar lo que nació férreamente unido por la historia -PRI y gobierno- es una lucha legítima, necesaria, requisito de la modernización real del país. Pero por otra parte, es también una lucha cuesta arriba, de éxito improbable en el corto o incluso en el mediano plazo. Es un esfuerzo que tiene en contra la renuencia de la propia oposición a cooperar contra el supuesto enemigo común, y que, sobre todo, tiene en contra el poder de la burocracia autoritaria, el del gran dinero, la indiferencia del mundo externo, y una cultura cívica que impide a un buen número de mexicanos considerar ilegítima y contraria al interés general la simbiosis gobierno-partido, que es la nota característica de este régimen desde 1929.